

Guyana: Después de Burnham ¿Qué?

Rita Giacalone de Romero

Rita Giacalone de Romero: Socióloga venezolana. Investigadora principal del proyecto "La República Cooperativa de Guyana". Es autora de numerosos artículos sobre el Caribe anglófono y del libro "Estudio Histórico de la Guyana Británica".

La muerte de Linden Forbes Burnham, figura dominante de la vida política de Guyana durante más de dos décadas y gobernante de su país desde antes de la independencia en 1966, ha dejado a Guyana en una situación de incertidumbre.

Racialmente dividida, altamente militarizada, enfrentada a una crisis económica muy severa, socialmente agitada y, hasta ahora, sumamente centralizada en la persona del líder Burnham, el país presenta tanto interna como internacionalmente una perspectiva de inestabilidad y de discontinuidad de la política de Burnham. El estilo personalista del difunto autócrata, con su visión muy peculiar de un socialismo cooperativista, no ha permitido desarrollar a tiempo un sistema de la administración del poder basado en un proceso orgánico y formal para la sucesión y la toma de decisiones.

En estos momentos parece más dudoso que nunca que el People's National Congress (PNC, Congreso Nacional del Pueblo), fundado por Burnham en 1975 y apoyado principalmente por la población de origen africano, que constituye más del 40% de los aproximadamente 800.000 habitantes, llegue a realizar las elecciones previstas en este año.

Aun sin la muerte de Burnham, la República Cooperativa de Guyana se hubiera enfrentado este año al reto de un proceso electoral en condiciones especialmente difíciles para cada uno de los actores involucrados en él, no sólo por la existencia de una crisis económica prolongada, que afecta todas las facetas de la vida guyanesa, sino por los dilemas políticos que se le plantean tanto al partido gubernamental como a la oposición. En el campo político, los fenómenos recientes más importantes abarcan la reestructuración del sistema político mediante una constitución "socialista", el predominio de tres partidos declaradamente marxistas, una lucha interna por el poder entre los miembros del partido que ha gobernado a esta nación desde antes de su independencia en 1966, complicada por las ambiciones de sectores militares poderosos y privilegiados, y la proliferación de

huelgas que hacen evidente el descontento de los trabajadores con una situación económica que incide sobre ellos en forma negativa y que amenaza con llevar a la bancarrota a la nación.

PROLONGADA CRISIS ECONOMICA

En 1982, Clive Thomas caracterizaba la crisis como manifestándose en todas las facetas de la vida guyanesa: economía, trabajo, sociedad, sistema político, estructura del Estado, sistema legal, cultura, moralidad pública y hasta estado psicológico de la población. En el centro de la crisis colocaba al colapso del sistema de producción nacional, que en un 80 por ciento aproximadamente está controlado por el Estado. Los tres principales productos de exportación (bauxita, arroz y azúcar) habían fracasado en alcanzar las metas de producción propuestas y otros sectores de la economía (producción de alimentos, servicios públicos, etc.) manifestaban una creciente incapacidad para cubrir las demandas de la población. El desempleo, la emigración de personal calificado, la inflación y la escasez de los productos esenciales en el mercado interno fueron algunas consecuencias de la situación económica prevaleciente. La respuesta inicial del gobierno consistió en imprimir dinero y recurrir a préstamos que, para 1980, colocaron la deuda pública en 2.500 millones de dólares. En el ámbito externo, la crisis petrolera, la inflación mundial y la crisis de acumulación en los centros metropolitanos, contribuyeron a agravar el panorama. Las dificultades llevaron al gobierno guyanés en 1978 a dirigirse al Fondo Monetario Internacional por primera vez, pero, a pesar del incremento de los impuestos, el fin de la mayoría de los subsidios gubernamentales, la eliminación de personal en las corporaciones estatales y el congelamiento de los salarios, entre otras medidas, la tendencia decreciente y aun negativa de la economía no se alteró. Paralelamente se mantuvo el gasto en el rubro de seguridad nacional, que fue reforzado con recursos de hombres y armamentos para hacer frente al descontento generado por las medidas económicas. Thomas concluye su análisis señalando que una solución política podría iniciar el proceso destinado a poner fin a la crisis, puesto que Burnham y el PNC, al alcanzar el poder en 1964 sin el consentimiento popular, habían debido reforzar la exclusión de las masas y, por lo tanto, bajo el PNC no habría posibilidades de una democratización del Estado que permitiera a todos contribuir a una solución nacional a la crisis.

AUSTERIDAD VS PREBENDAS

¿Cuál es la situación económica actual, después de tres años del cuadro que describiera Thomas? Recientemente la economía guyanesa ha experimentado una

mejoría. Su PNB ha crecido, según cifras oficiales, en un 2 por ciento en 1984, luego de una declinación del 10 por ciento en 1983 y del 13 por ciento en 1982. Esta mejoría se atribuye al aumento en la producción de bauxita como resultado de un programa de incentivos para los trabajadores, junto con mejores condiciones en el mercado internacional. Sin embargo, no se observan mayores cambios en cuanto al continuo deterioro del standard de vida, de los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas, desempleo, represión, mala administración del Estado, etc., a lo que se agregan devaluaciones de la moneda que, en conjunto, representan una pérdida de alrededor del 36 por ciento de su poder adquisitivo. La deuda externa sigue pesando considerablemente en las finanzas guyanesas y, si bien el gobierno de Guyana ha venido instrumentando el tipo de medidas que el FMI promueve, no ha conseguido desde hace dos años negociar un paquete de ayuda económica que permita alejar el espectro de la bancarrota. De todas maneras, la política económica de austeridad gubernamental no ha sido total y se han producido aumentos en los salarios de la administración pública a fines de 1984, los que alcanzan hasta un 109 por ciento de incremento en el caso del Presidente de la República. Los mayores porcentajes de aumento en los niveles más altos fueron justificados con el argumento de la necesidad de detener la creciente emigración masiva de personal altamente capacitado, pero para los opositores es simplemente un medio de repartir las prebendas del Estado entre los gerentes de las corporaciones nacionales, los principales hombres del régimen en el gobierno y el personal militar superior, todos clientes favoritos del difunto presidente Burnham y del PNC.

El alza general de los salarios del sector público no es tampoco difícil de entender si recordamos que 1985 es un año electoral y que el sector público ha sido tradicionalmente el baluarte de los afro-guyaneses vinculados al PNC.

DESCONTENTO LABORAL

La crisis económica ha hecho también que el movimiento obrero se enfrente cada vez más al gobierno, a través de sus organizaciones sindicales o a través de huelgas no autorizadas por los sindicatos. Paralelamente al aumento en el número y frecuencia de las huelgas se ha dado el aumento de la represión del gobierno mediante una legislación más restrictiva o directamente mediante medidas de carácter ilegal. Esto no ha podido impedir, sin embargo, que desde el año pasado la máxima dirigencia sindical, representada por el TUC, haya pasado a ser controlada por sindicatos relacionados con el PPP y que se hayan improvisados "comités de solidaridad" entre obreros de la bauxita y el azúcar, pertenecientes a grupos étnicos usualmente enfrentados, símbolo de una creciente conciencia de clase.

En este panorama, el gobierno guyanés debe tomar decisiones cruciales para esa nación: en lo político, resolver la lucha interna por el poder dentro de su propio partido y decidir si se posponen, o no, las elecciones generales, y, en lo económico, definir si seguir insistiendo en negociar con el FMI o arriesgar una ruptura total. La complejidad de variables que cada una de estas decisiones requiere tomar en consideración, algunas de las cuales dependen de factores externos, hacen este reto más peligroso para los herederos de Burnham y su partido.

En este sentido, para ellos, como para Thomas, resulta fundamental una solución política, a la cual también aspiran los dos principales partidos opositores.

CAMBIOS CONSTITUCIONALES

Desde su creación en 1970, la República Cooperativa de Guyana ha modificado, en forma considerable, su organización constitucional, alejándola de aquella heredada de Gran Bretaña y vaciada en el molde del modelo Westminster. El último paso en este sentido fue la sanción de la Constitución de 1980, después de que un referéndum fraudulento autorizara en 1978 a la Asamblea Nacional, controlada por el partido gubernamental, el Congreso Nacional del Pueblo (People's National Congress, PNC), a aprobar una reforma de la constitución vigente con sólo el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En la nueva constitución se estableció que el primer ministro Forbes Burnham, en el poder desde 1964, se convirtiera en presidente ejecutivo con poderes prácticamente ilimitados y sin elecciones y, al mismo tiempo que se aprobaba la participación en la Asamblea Nacional de representantes elegidos por las nuevas unidades de gobierno local, dando así representación a organizaciones de base, se supeditaba esa Asamblea al presidente que puede convocarla o disolverla a su antojo. Posteriormente, en 1983, otra reforma constitucional modificó algunos de los aspectos más positivos de ese documento, tal como el que otorgaba al salario la misma protección de que gozaba la propiedad, principio que ahora desapareció, agregándose a esto la restricción de la negociación colectiva y el derecho de huelga.

LOS PARTIDOS POLITICOS

A pesar de los cambios constitucionales, el ámbito partidista no ha variado mucho y persiste en Guyana desde hace años, el predominio de tres partidos: el PNC, el Partido Progresista del Pueblo (People's Progressive Party, PPP) y la Alianza del Pueblo Trabajador (Working People's Alliance, WPA), que se declaran marxistas, pero son, o intentan ser, policlasistas y han moderado su radicalismo de etapas

anteriores. Esto incluye a la WPA que, luego de la muerte de su líder Walter Rodney en 1980 y, más aún, a partir de su ingreso como miembro asociado a la Internacional Socialista, a principios de 1984, ha insistido en declararse partidaria del pluralismo político y las elecciones y la prensa libres, en un esfuerzo por atraerse a los sectores medios, la Iglesia y los grupos profesionales, en su enfrentamiento con el gobierno del PNC. Esta posición contrasta con la del PPP que, a pesar de contar con el apoyo de sectores medios indoguyanenses y haber seguido en general una política más acomodaticia que la WPA, mantiene todavía una retórica radical estridente. El intento de la WPA de convertirse en una alternativa viable para los sectores medios guyaneses frente al desacreditado gobierno actual, estaría encaminado además a tratar de lograr la tolerancia, si no el apoyo de Estados Unidos, renuente a seguir apoyando al PNC, pero también a brindar ayuda a un cambio de gobierno que signifique la vuelta al poder del PPP prosoviético de Cheddi Jagan, a quien ayudara a desplazar del gobierno en 1964.

El panorama político interno de Guyana se ve complicado por el hecho de que el carácter declaradamente marxista de los tres partidos más importantes atrae la participación en el debate interno de otros partidos marxistas de la región caribeña, tal como el Partido Comunista de Cuba. Un ejemplo de esta tendencia lo constituye el artículo aparecido en Granma el 8 de abril de 1984, en el cual se hacía la apología del gobierno de Burnham y el PNC. Aunque esta actitud de los cubanos ha sido interpretada como un gesto de apoyo a uno de los gobiernos regionales que puede ser víctima de una agresión norteamericana después de los sucesos de Granada, resulta evidente también que se trata de una interpretación parcializada a favor de la gestión del actual gobierno guyanés, lo que puede traer repercusiones internas. Quizás como una apreciación tardía de los peligros que esto puede engendrar, el mismo número de Granma incluye un breve artículo de Cheddi Jagan. Con respecto a este último, al parecer el Partido Comunista de Cuba ha jugado un rol activo en las conversaciones que se han venido realizando entre el PNC y el PPP, tendientes a formar un gobierno de coalición en Guyana como respuesta a la amenaza de una invasión imperialista en medio de una profunda crisis económica.

A principios de este año circuló la versión de que Jagan sería nombrado para un puesto de importancia en el gobierno guyanés - lo que fue desmentido por el líder del PPP - a fin de lograr un gobierno de unidad nacional en el cual tendría interés el gobierno cubano. El sentimiento al respecto es que, de no producirse un acuerdo político entre dos de los tres partidos más importantes, podría suceder un golpe militar, mientras que una acción conjunta PNC-PPP permitiría además al gobierno posponer las elecciones generales, sin tener que recurrir nuevamente al fraude. Es

un hecho, por otra parte, que a fines de 1983 tanto el PNC como el PPP y la WPA coincidieron en censurar a Estados Unidos por su intervención en Granada, lo que hizo que algunos se plantearan la posibilidad de que el gobierno incorporara, al menos, al PPP. Durante 1984, las negociaciones en este sentido se extendieron por varios meses, hasta ser interrumpidas en diciembre, cuando el partido gubernamental perdiera el control del Congreso Sindical (Trades Union Congress, TUC), que agrupa a la mayor parte de los gremios guyaneses, y lo obtuviera el PPP. El 25 de enero de 1985 el Congreso General del PNC hizo pública una nueva invitación al PPP para realizar conversaciones conjuntas "en vista de la situación política y económica global" y a fin de "protegerse contra la intervención imperialista". El principal obstáculo al gobierno de unidad nacional parece ser el temor de los partidarios del PNC de que a través de este acuerdo los indoguyaneses que respaldan al PPP tengan acceso a los empleos en la administración pública y las fuerzas de seguridad que hoy constituyen el baluarte de los partidarios del gobierno.

LA SUCESION PRESIDENCIAL

Así como la WPA se enfrenta al reto de cambiar de imagen en una forma lo suficientemente persuasiva como para conseguir apoyo interno y externo, y el PPP a la decisión de integrarse a un gobierno de unidad nacional que permita posponer las elecciones o de arriesgar participar en una contienda electoral posiblemente tan fraudulenta como las anteriores, el PNC debe resolver, los problemas que plantea la lucha interna por el poder después de la muerte de Burnham. La sucesión en el liderazgo del PNC y, por ende, del gobierno, se convierte en cuestión crucial para un partido que desde su creación ha vivido a la sombra de un único líder, el que había asumido en su persona la jefatura del gobierno, el partido y las fuerzas armadas en su carácter de comandante en jefe de las mismas. Quién o quiénes serán los encargados de reemplazarlo en todas o cada una de esas funciones, es la pregunta clave para la nación guyanesa, en general, y para los miembros del partido y los integrantes de las fuerzas de seguridad, en especial. En un sistema político en el que coexisten un presidente ejecutivo, cinco vicepresidentes y un primer ministro, cualquiera de ellos puede ser candidato, o tener aspiraciones a serlo. Dado los poderes que agrupa en sí mismo el presidente, éste es, sin duda, el cargo más disputado. El hecho de que el primer ministro Desmond Hoyte haya asumido de inmediato la presidencia luego de la muerte de Burnham, no significa necesariamente una decisión definitiva al respecto, aunque ha sorprendido la rapidez y la ausencia aparente de una disputa seria por la sucesión. Hay que tener presente que en la lista de espera están también el que fuera vicepresidente hasta la desaparición de Burnham, el ahora primer ministro Hamilton Greene, y el ministro

de Salud Pública, Richard van West, yerno de Linden Forbes Burnham. Aunque cada uno de ellos puede tener títulos y/o experiencia como para justificar su aspiración al cargo máximo, el problema no reside en los méritos o habilidades de los candidatos sino en el grado de apoyo que obtengan de la maquinaria interna del PNC o de las fuerzas de seguridad y si es que alguno será capaz de unificar el apoyo necesario para imponerse a los demás sin producir divisiones graves en el seno del partido, sin reactivar violentos conflictos raciales entre afro e indoguyaneses, como los que afectaron a Guyana en 1962 y 1964, y sin provocar enfrentamientos armados que pudieran llevar al establecimiento de una opción militar en el gobierno. Esta última alternativa, por otra parte, es la que más se ha dado dentro del "modelo africano" de gobierno con el que la República Cooperativa de Guyana parece tener más afinidad, pero se vería complicada, en el caso guyanés, por la existencia de numerosas organizaciones militares (ejército, milicia, servicio nacional, etc.) y por la militarización de grupos vinculados al PNC como la Casa de Israel y la rama juvenil del partido que han recibido entrenamiento militar y armas a lo largo de los últimos años.

OPCIONES POLITICAS

Las soluciones políticas varían según cada uno de los principales partidos y pueden resumirse en distintas opciones: 1) para el PNC, resolver la lucha interna por el poder y seguir manteniendo el control de las fuerzas de seguridad o arriesgar un golpe de estado o un gobierno de unidad nacional con el PPP; 2) para el PPP, un gobierno de unidad nacional con el PNC o el mantenimiento del statu quo; 3) para el WPA, un gobierno de unidad nacional sin el PNC y mediante una unificación de toda la oposición, incluyendo los sectores medios, o una revolución. Vale la pena destacar que, en cada caso, la primera opción es aquella que cada partido parece percibir como más adecuada a sus intereses. Es evidente que para el PNC una solución al problema de la sucesión de Burnham, que no produzca fisuras en el partido ni en las fuerzas armadas, garantiza que, de no mediar una intervención extranjera, su control del gobierno se mantendrá, mientras que, por ejemplo, un gobierno de unidad nacional con el PPP obligaría a un reparto de prebendas político-económicas que en la situación actual se han vuelto escasas. Un gobierno de unidad nacional con el PNC, por su parte, daría a la dirigencia del PPP el acceso al coto restringido de los recursos estatales y podría representar la vía más segura de alcanzar de alguna manera el poder, mientras que la continuación indefinida de la situación política actual podría poner fin a una de las últimas oportunidades de Cheddi Jagan de volver al gobierno de Guyana. Para la WPA conseguir la unificación de los partidos y sectores opositores de Burnham (Iglesia, empresariado, etc.) en un movimiento general, en momentos en que el PNC se

enfrenta a una crisis interna que lo debilita, podría representar la aceptación de su giro a la moderación e incluso su aceptación internacional, mientras que una revolución necesitaría el apoyo externo de la URSS y Cuba, no sólo poco probables sino que además colocaría al gobierno revolucionario, en caso de triunfar, en calidad de enemigo directo de Estados Unidos en el Caribe, con los riesgos que esto supone.

Resulta notorio que los tres partidos más importantes de Guyana vuelven a coincidir: a su declarado marxismo y a su carácter policlasista y relativamente moderado, se une ahora la noción de que para resolver los problemas de Guyana es necesario primero hallar una solución política; implícito está también el concepto de que si esto se logra será posible solucionar la crisis económica.

Los dilemas políticos partidistas adquieren relevancia internacional si se considera la política exterior del gobierno del PNC. Desde 1978, éste ha intentado un acercamiento a Washington, al FMI y al Banco Mundial, debido a los problemas económicos y al fin del Protocolo de Puerto España en 1982, que reactiva un reclamo territorial de Venezuela sobre la región esequiba ocupada por Guyana. Excepciones a esta tendencia lo constituyen la fuerte reacción del gobierno guyanés ante la intervención de Estados Unidos en Granada en 1983 y el mantenimiento de buenas relaciones con Cuba, aunque aquí debe señalarse que el más interesado en mantenerlas parece ser el gobierno cubano. En este sentido se advierte que, mientras existieron en el Caribe los gobiernos de Michael Manley en Jamaica y Maurice Bishop en Granada, en aquellas ocasiones en que el gobierno de Cuba alababa al guyanés lo hacía por aspectos de su política exterior independiente o por su política económica de nacionalizar los recursos nacionales, permaneciendo en silencio con respecto a su política interna hasta el artículo de Granma en 1984, cuando ya no existen otros gobiernos afines al cubano en el ámbito del Caribe de habla inglesa. Por su parte, la respuesta de Guyana a la nueva configuración de fuerzas en el Caribe desde 1983 consiste en lo que Perry Mars denomina una "diplomacia defensiva", basada en la necesidad del gobierno de cultivar relaciones dentro de la región con Estados que poseen diferentes orientaciones ideológicas que Guyana, tales como Estados Unidos, Brasil y más recientemente la misma Venezuela. Pero, como Mars también destaca, la posibilidad de éxito de esa diplomacia descansa en buena parte en la medida en que el gobierno que la lleva a cabo no haya alienado a las masas y brinde adecuadas oportunidades de participación política a la mayoría de los sectores internos, pues de lo contrario corre el riesgo de que la nación más poderosa, en este caso Estados Unidos, prefiera utilizar la falta de unidad interna y los sectores disidentes para establecer una opción política más cercana a sus intereses. Dentro de este cuadro cobran un

significado más amplio los dilemas políticos de cada uno de los partidos guyaneses en un año en que la muerte de Burnham y eventualmente las elecciones obligan a una definición. Es lamentable que hasta el momento no se vislumbre la posibilidad de una acción conjunta de los tres partidos ni de elecciones generales que permitan el acceso al gobierno de aquel partido que sea capaz, en forma honesta, de atraer el mayor respaldo popular.